

**S E S I Ó N   P Ú B L I C A   NÚM. 7**  
**O R D I N A R I A**  
**JUEVES 16 DE ENERO DE 2014**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con diez minutos del jueves dieciséis de enero de dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

A continuación, el señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

**I. APROBACIÓN DE ACTA**

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número seis ordinaria, celebrada el martes catorce de enero de dos mil catorce.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

**II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves dieciséis de enero de dos mil catorce:

**I. 32/2012**

Acción de inconstitucionalidad 32/2012, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, demandando la invalidez de los artículos 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales, 16, fracción I, apartado D, y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil doce. En el proyecto formulado por la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se propuso: *“PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales; 16, fracción I, apartado D, y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones. TERCERO. Publíquese esta ejecutoria en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

La señora Ministra ponente Luna Ramos realizó la presentación de la modificación del considerando quinto del proyecto, en el sentido de que se transcribieron los artículos 133 del Código Federal de Procedimientos Penales y el 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, seguido del extracto de los conceptos de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los cuales se respondió con los criterios de esta Suprema Corte en materia de derecho a la privacidad, se transcribió el artículo 16 constitucional en la parte conducente y el artículo 30 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos para referir que los derechos humanos tienen ciertas restricciones ante el orden público. Luego, se determinan los alcances de las normas impugnadas en el sentido de que están dirigidos a la localización de los aparatos, por lo que no implica la intervención de comunicaciones ni domicilios y, en consecuencia, no se necesita la autorización de la autoridad jurisdiccional, ya que los propios artículos establecen las formalidades para realizar las solicitudes de mérito, cuáles son las autoridades que tendrán esta facultad y las sanciones a quienes incurran en algún exceso. Finalmente, se considera que se trata de una herramienta más para la persecución de los delitos en uso de las facultades establecidas por los artículos 21 y 102 de la Constitución Federal, así como 129 del Código Federal de Procedimientos Penales.

También se transcribe la parte relativa de los trabajos legislativos, en la cual se reflejan los propósitos y la justificación de las normas estudiadas. Se hace un estudio que diferencia la localización geográfica tanto de los cateos como de las intervenciones telefónicas. En cuanto al argumento de la promovente relativo a que la medida carece de precisión de destinatarios, se responde que no es necesario establecerlos porque su fin es precisamente indagar a quién se vinculan las llamadas. En cuanto al límite temporal, se definió que se agota en el momento en que se da la localización. Asimismo, se estudia el caso “Escher vs.

Brasil” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus consideraciones.

Por otro lado, se propone que, aun en el caso de que se considerase que existe intromisión en la vida privada, de acuerdo con una tesis de la Primera Sala y con los criterios de la Corte Interamericana, lo cierto es que existe justificación para hacerlo porque, conforme al respectivo test de constitucionalidad, se advierte que se persigue un fin legítimo en la medida de que constituye una herramienta eficaz de investigación, la cual resulta proporcional dado que la restricción del derecho se ve compensada por la importancia de los bienes jurídicamente protegidos, tomando en cuenta que se trata de delitos en los cuales media extrema urgencia entendida como poner en riesgo la vida o la integridad de las víctimas y cuando existe riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito, razón por la cual puede prescindirse de la orden judicial.

Por último, se otorga una especie de lineamiento para indicarle a la autoridad que siempre tendrá que motivar la medida al momento de emitir la comunicación al concesionario, en la cual se precisen las condiciones fácticas que revelen el potencial daño a personas o la ocultación de datos, de la cual se dejará constancia en la averiguación previa respectiva.

El señor Ministro Valls Hernández se manifestó en contra de la propuesta modificada del proyecto, pues la única forma de garantizar que no se presente un exceso o

uso indebido por parte de la autoridad investigadora a la medida es establecer la previa autorización judicial en la que se determine su necesidad, como contrapeso institucional de la función investigadora, en aras de proteger los derechos humanos.

Estimó que no es suficiente con que la ley y la sentencia de este Alto Tribunal indiquen los lineamientos que acoten la atribución cuestionada para que no se den sus excesos, pues en materia de derechos humanos no se trata de prever la posibilidad de denunciar abusos a fin de reparar el daño, sino de que el Estado garantice el ejercicio y protección de los derechos humanos.

El señor Ministro Franco González Salas se posicionó en favor del sentido del proyecto pero se separó de algunas consideraciones y anunció que, en su caso, elaboraría el voto correspondiente.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena también se manifestó de acuerdo con el proyecto, pero se apartó de las consideraciones, por lo que formulará voto concurrente.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se apartó de la línea argumentativa y se adhirió a la interpretación conforme del proyecto, de la cual deriva la validez de las normas impugnadas.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta modificada del proyecto, contenida en el considerando quinto, relativa al reconocimiento de validez

de los artículos 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la cual se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena en contra de las consideraciones, Luna Ramos, Franco González Salas en contra de las consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales con salvedades, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza con salvedades. Los señores Ministros Cossío Díaz, Valls Hernández y Sánchez Cordero de García Villegas votaron en contra.

Por ende, se obtuvo una mayoría de cinco votos a favor de las consideraciones que sustentan el referido reconocimiento de validez.

La señora Ministra ponente Luna Ramos expuso las razones contenidas en el considerando sexto del proyecto, relativo al estudio del segundo concepto de invalidez, atinente al artículo 16, fracción I, apartado D, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el cual, según la promovente, violenta los artículos 16 constitucional, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño porque también se vulnera el derecho a la privacidad al determinarse en el artículo en estudio que la medida procede respecto de otro tipo de delitos establecidos en el artículo 133 Quáter del

Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que el supuesto de procedencia es amplio y, por tanto, debe declararse su invalidez.

Indicó que en el proyecto se propone declarar su validez, en razón de que no se está ampliando la competencia del Ministerio Público, sino que únicamente se refiere a uno de los requisitos para quienes participan en una licitación para obtener una concesión del espectro radioeléctrico. Aclaró que dicho artículo ya existía antes de la reforma de dos mil nueve con la misma redacción.

El señor Ministro Cossío Díaz se pronunció en contra del proyecto, indicando que el diecisiete de abril de dos mil doce se republicó el precepto combatido, el cual adquirió un sentido normativo distinto, dado que difiere que las acciones coordinadas sean con la autoridad judicial de que lo sean con la autoridad ministerial, como se ha definido por la posición mayoritaria.

Consideró que la situación de incompetencia se reproduce en este artículo al haberse republicado y haber introducido esta condición a los particulares en virtud de las actuaciones de la autoridad, las cuales no pueden serle reconocidas tomando en cuenta el derecho a la privacidad previsto en el artículo 16 constitucional.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se inclinó en favor del proyecto, precisando que al votar la procedencia del asunto estimó que no había cambiado el sentido

normativo del precepto, añadiendo que el artículo es taxativo en cuanto a los delitos del artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales.

El señor Ministro Franco González Salas se pronunció en favor del proyecto, estimando que no se trata de un acto legislativo nuevo.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación el considerando sexto del proyecto, relativo al reconocimiento de validez del artículo 16, fracción I, apartado D, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el cual se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Cossío Díaz, Valls Hernández y Sánchez Cordero de García Villegas votaron en contra.

El secretario general de acuerdos dio lectura a los puntos resolutivos correspondientes, en los siguientes términos:

*“PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales, 16, fracción I, apartado D y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en los términos de los considerandos quinto y sexto de este fallo.*



*TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó por unanimidad de once votos, con anuncio de voto particular de los señores Ministros Cossío Díaz, Valls Hernández y Sánchez Cordero de García Villegas.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados, dejando a salvo el derecho de los señores Ministros de formular los votos que a su interés convenga.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el asunto siguiente:

## **II. 65/2012**

Acción de inconstitucionalidad 65/2012, promovida por diversos Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Estado de Jalisco en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la mencionada entidad, demandando la invalidez del Decreto 24158/LIX/12, en la porción que derogó la fracción XI del artículo 9 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad de trece de noviembre de dos mil doce. En el proyecto formulado por el señor Ministro Alberto Pérez Dayán se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y fundada parcialmente la presente acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Estado de Jalisco. SEGUNDO.*

*Se declara la invalidez del decreto 24158/LIX/12, publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco el trece de noviembre de dos mil doce, en la porción que deroga la fracción XI del artículo 9 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco. TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro ponente Pérez Dayán realizó la presentación de las consideraciones procesales del proyecto, adelantando que en la parte correspondiente a las causas de improcedencia y fondo del asunto recibió observaciones por parte de los señores Ministros Aguilar Morales y Luna Ramos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta del proyecto contenida en los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la competencia, la oportunidad y la legitimación, los cuales se aprobaron en forma económica por unanimidad de once votos.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó los razonamientos del considerando cuarto del proyecto, relativo a las causas de improcedencia, en el sentido de que se desestima la invocada por el gobernador del Estado de Jalisco ya que ni en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal ni en su ley reglamentaria se advierte la obligación de que los promoventes hayan agotado algún

recurso o medio ordinario de defensa por el cual pudieran combatirse los actos impugnados, en atención a lo previsto por el artículo 19, fracción VI, de dicha ley reglamentaria; asimismo se desestima la otra causa de improcedencia invocada por el gobernador en cita, al señalar que se impugna un decreto que deroga un artículo, es decir, un acto formal y materialmente legislativo, en atención a lo previsto en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria respectiva.

Aclaró que, al abordar los considerandos relativos a la oportunidad y a la legitimación, se dieron razones para desestimar sendas causas de improcedencia.

El señor Ministro Valls Hernández coincidió con que resulta infundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que la facultad de iniciativa de los promoventes no conlleva necesariamente al resultado esperado, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 147, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, dichas iniciativas deben ser valoradas en el procedimiento legislativo por razón de interés público y, por ende, no debe considerarse como una vía para la solución del conflicto en términos de la fracción invocada.

Consideró que el argumento del Ejecutivo del Estado, relativo a que la aclaración del error en la minuta del decreto por parte de la comisión dictaminadora, debe contestarse en el sentido de que, conforme al artículo 208, numeral 2, de la

citada ley orgánica, procede cuando por cualquier causa una minuta contiene disposiciones distintas a lo exactamente aprobado por la Asamblea, lo que en el caso no se actualiza, pues en las observaciones del gobernador se incorporaron modificaciones no contempladas en etapas previas del procedimiento legislativo.

Finalmente, respecto de la diversa causa de improcedencia invocada con el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, estimó conveniente citar como precedente la acción de inconstitucionalidad 1/2011, en la cual se analizó la validez constitucional de la derogación de una de las fracciones de un artículo de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León que contemplaba a los sujetos exentos del pago del impuesto sobre nóminas.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán modificó el proyecto a partir de las observaciones del señor Ministro Valls Hernández, especialmente en lo relativo a la causa de improcedencia aducida por el gobernador en la cual esgrimió el argumento consistente en que era improcedente la acción de inconstitucionalidad en la medida en que los promoventes pudieron haber ejercido su derecho de iniciativa para combatir el vicio que motivó la litis. Señaló que desarrollaría estas ideas que complementan el contenido del proyecto.

La señora Ministra Luna Ramos consideró que determinar si se necesitaba o no iniciativa para la derogación del artículo 9, fracción XI, de la Ley del Notariado del Estado

de Jalisco es atinente al fondo porque se analiza el proceso legislativo.

El señor Ministro Presidente Silva Meza compartió la impresión de la señora Ministra Luna Ramos.

El señor Ministro Valls Hernández indicó que ello no está relacionado directamente con el fondo.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán precisó que la participación del señor Ministro Valls Hernández concernía exclusivamente con la improcedencia y, por tanto, con el matiz realizado no se estaría involucrando el fondo.

El señor Ministro Pardo Rebolledo precisó que se hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, en el sentido de que no hay definitividad en el decreto porque se pudo haber presentado otra iniciativa para modificarlo, por lo que más allá de estudiar si involucra o no el fondo, debe contestarse determinando que no existe recurso ordinario en ninguna ley que deba hacerse valer antes de promover la acción de inconstitucionalidad y, en esa virtud, deviene infundada e inatendible.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán señaló que en la foja treinta y uno del proyecto se emite la respuesta correspondiente a esta causa de improcedencia y que cuidaría que la matización no incluya un pronunciamiento de fondo.

El señor Ministro Pardo Rebolledo estimó que en la parte que invocó el señor Ministro Pérez Dayán debería determinarse que no existe medio de defensa que debieran agotar los promoventes previamente a la acción de inconstitucionalidad, y el hecho de tener la facultad de iniciativa no constituye un medio de defensa contra el acto impugnado.

El señor Ministro Franco González Salas consideró que se trata de dos aspectos que involucran un problema de fondo porque se tendría que analizar cómo está la legislación respectiva y ver si hay algún ordenamiento o precepto que estableciera alguna condición para la procedencia de un acto legislativo. Consecuentemente, estimó que se debería estudiar y resolver esta cuestión en el fondo y definir en votación si es de fondo o no.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea coincidió con la argumentación del señor Ministro Pardo Rebolledo, esto es, que no se involucra el fondo, sino exclusivamente se estudia si existe o no medio de defensa a agotar previamente. Respecto de lo enunciado en el proyecto en el sentido de que el artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria no prevén medios de defensa, resaltó que se tienen que buscar éstos en las leyes locales y, en el caso, no existe recurso alguno, siendo que la iniciativa tampoco se constituye como uno.

El señor Ministro Pérez Dayán modificó el proyecto a partir de las participaciones de los señores Ministros Pardo Rebolledo y Zaldívar Lelo de Larrea.

La señora Ministra Luna Ramos precisó que en el proceso legislativo inicialmente se contemplaba la reforma de dos artículos de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, los cuales se aprobaron y se mandaron al gobernador y éste, en sus observaciones agrega el artículo 9, fracción XI, de dicha ley, lo cual es considerado conveniente por la Comisión de Puntos Constitucionales, lo que resulta ser el problema constitucional a dilucidar, a saber, que este último artículo no fue discutido ni tuvo iniciativa para llevar a cabo su proceso legislativo.

Por otro lado, el planteamiento de la causa de improcedencia, consiste en que se pudo haber resuelto el problema con la presentación de otra iniciativa para solicitar su derogación al tener los promoventes esa facultad, o bien, haber corregido la minuta, por lo que se involucra el fondo.

El señor Ministro Aguilar Morales señaló que lo expuesto por la señora Ministra Luna Ramos sería atinado siempre y cuando el estudio respectivo partiera de la posibilidad de presentar una iniciativa, lo cual daría lugar a un pronunciamiento de fondo, pero como lo sostuvo el señor Ministro Pardo Rebolledo, la facultad de presentar iniciativas no puede considerarse como un medio de defensa, siendo este el sentido en el que debe analizarse, pues así se planteó como causa de improcedencia, para responder que

la posibilidad de presentar una iniciativa no genera una improcedencia de la presente acción.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta modificada del considerando cuarto del proyecto, relativo a las causas de improcedencia, la cual se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas y Sánchez Cordero de García Villegas votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso a las trece horas con veinte minutos y reanudó la sesión a las trece horas con treinta y cinco minutos.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó el considerando quinto del proyecto, relativo al estudio del fondo. Indicó que se propone declarar fundados los conceptos de invalidez en los que se plantea que el proceso legislativo que originó el decreto combatido es violatorio de los principios de seguridad y deliberación parlamentaria contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal porque, primeramente, no existe iniciativa del artículo 9, fracción XI, de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, por lo que no fue de conocimiento previo de los integrantes del Congreso del Estado que les permitiera discutir al respecto, sino que el motivo de la reforma a dicho



dispositivo derivó de las observaciones formuladas por el gobernador del Estado.

Adelantó estar de acuerdo con la segunda parte del memorándum que le fue remitido por el señor Ministro Aguilar Morales y al que hizo mención en la presentación del proyecto, de cuyo contenido él mismo dará cuenta; precisó que no coincide con las afirmaciones relativas a la fuerza de invalidez que pudieran tener las violaciones procesales porque estimó que sí tienen ese poder invalidatorio; por otro lado, reseñó que dicho memorándum también indica que el documento no fue recibido por los diputados integrantes de esa legislatura.

En cuanto al diverso memorándum de la señora Ministra Luna Ramos, no coincidió en que la moción pudiera ser la solución al caso, puesto que se presenta en las discusiones en un parlamento, ello tomando en cuenta que quien promueve la acción de inconstitucionalidad es una legislatura distinta a la que aprobó el decreto en disputa.

El señor Ministro Aguilar Morales indicó estar de acuerdo con la invalidez pero no con las consideraciones. Coincidió con que no existió certeza acerca de lo aprobado en cuanto a la derogación del artículo 9, fracción XI, de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco porque no fue del conocimiento previo de los integrantes del Congreso del Estado, pero por razones distintas a las del proyecto; esto es, porque conforme al artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, ningún proyecto de

ley o decreto puede ser presentado a primera lectura sin que se haya circulado a los diputados por cualquier medio con acuse de recibo. Precisó que el delegado de los promoventes solicitó al Ministro instructor para que requiriera al Congreso por el acuse referido, a lo cual el Poder Legislativo del Estado respondió que toda la documentación fue remitida con el informe rendido, por lo que resulta insuficiente la afirmación de que en el proceso legislativo se dispensaron la primera y segunda lecturas del dictamen en virtud de que obraban en poder de cada uno de sus integrantes las copias respectivas, puesto que no hay certeza de que los diputados realmente conocieron el contenido de dicho dictamen.

Por otra parte, no se justificó la urgencia para el estrechamiento de los términos, pues en la legislación del Estado de Jalisco sólo se prevé ello de manera expresa tratándose de acuerdos legislativos o de dictámenes relativos a proyectos de decreto sobre la designación de gobernador interino o sustituto, por lo que la dispensa de lectura tampoco tuvo apoyo legal.

La señora Ministra Luna Ramos aclaró no estar de acuerdo con la posibilidad de que en una acción de inconstitucionalidad se aborde el estudio de violaciones indirectas a la Constitución, como es el caso, pero que, obligada por el criterio mayoritario, se pronunciaría al respecto.

Reseñó como antecedentes del asunto que el treinta y uno de diciembre de dos mil once se presentaron dos iniciativas, las cuales, tras el procedimiento legislativo respectivo, se aprobaron el catorce de septiembre de dos mil once. Se mandó al gobernador para efectos de su promulgación, sin embargo, hizo observaciones que remitió en octubre de dos mil doce. El quince de octubre de ese año, se turnan a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, el cual emite un dictamen que agrega la derogación de un artículo diferente al tratado en la iniciativa primaria. Se inició la discusión, dando cuenta dicha Comisión con su dictamen y dispensando una primera lectura supuestamente por haberlo repartido con anticipación. Indicó que la sesión se llevó a cabo el veinticinco de octubre de dos mil doce y que el dictamen de la Comisión referida se presume se envió, cuando menos, un día antes al Pleno del Congreso para la sesión, aunque no exista constancia de dicha entrega. Se dispensó la segunda lectura y, sin mediar discusión, se realiza la votación en lo general y posteriormente en lo particular, ambas con resultados favorables por los treinta y cuatro diputados presentes.

Señaló que el artículo 26 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco indica que los dictámenes de las Comisiones versarán únicamente sobre las observaciones del gobernador; en el caso, éstas referían a situaciones relacionadas con las reformas que se hacían al artículo 28 de la Ley del Notariado del Estado de

Jalisco, no así a la derogación del diverso artículo 9, fracción XI, eso lo agregó la comisión con el ánimo de reforzar las leyes.

Manifestó duda porque, por un lado, el artículo 16 del citado reglamento establece que no se tomarán en consideración los dictámenes que carezcan de los requisitos expresados por el artículo 159 de la ley respectiva, previa moción aprobada por la Asamblea, y en la cual procederá el retiro del dictamen a discusión, el cual deberá presentarse de manera correcta por parte de la Comisión dictaminadora y, por otro lado, a pesar de constar en el acta que se leyó una síntesis del dictamen origen de la materia de la litis, ningún diputado presentó moción para objetarlo, por lo que podría darse una convalidación de esa situación, aunque no es claro si dicha síntesis incluyó o no la parte de la derogación del artículo 9, fracción XI de mérito.

El señor Ministro Presidente Silva Meza levantó la sesión a las catorce horas con cinco minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria del día lunes veinte de enero de dos mil catorce, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.